

Neoliberalismo e inseguridad: un análisis crítico de la instalación de videocámaras de seguridad en la Provincia del Neuquén (2004-2014).

María Dolores Sancho.

Cita:

María Dolores Sancho (2015). *Neoliberalismo e inseguridad: un análisis crítico de la instalación de videocámaras de seguridad en la Provincia del Neuquén (2004-2014)*. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-061/636>

Neoliberalismo e inseguridad: un análisis del caso concreto de la instalación de videocámaras de seguridad en la Provincia del Neuquén (2012-2015)

Nombre y apellido: María Dolores Sancho

Pertenencia institucional: Universidad Nacional del Comahue (UNCo)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Dirección de correo electrónico: dolos_83@yahoo.com.ar

Resumen

En la década de los ochenta, en consonancia con el surgimiento del neoliberalismo, emergió un nuevo paradigma en torno a las políticas de seguridad basado en la prevención del delito más allá de la pena tanto en el mundo anglosajón como en Europa. El demostrado fracaso de la política penal junto con la emergencia de la racionalidad política neoliberal y el incremento de la “inseguridad” objetiva y subjetiva llevaron a que este nuevo paradigma se “globalizará” e irrumpiera en la Argentina durante la década del noventa.

En Neuquén, aparecen los primeros rasgos de estas ideas hacia el año 2000 y se materializan en distintas políticas y planes de seguridad: plan de reforma de la policía y creación de una Policía Comunitaria, Plan Integral de Seguridad 2004-2007, Plan de Gobierno de Seguridad Ciudadana 2009-2011 y, a partir de 2012, el Plan Provincial de Seguridad. En este sentido, nuestro interés se centra en el modo en que la racionalidad política neoliberal ha influido en la prevención del delito en la Provincia del Neuquén entre 2012 y 2015 atendiendo al caso concreto de la instalación de videocámaras de seguridad como política de seguridad.

Palabras Clave: Políticas de Seguridad-Prevención del delito-Racionalidad Política Neoliberal-Cámaras de seguridad

Introducción

En el presente trabajo, partimos de la idea de que las visiones y programas de neoliberalismo han moldeado los enfoques para gobernar el delito aún en el período que se denomina “posneoliberal”. En este sentido, partimos desde el enfoque de la gubernamentalidad es decir de un análisis que se centra en las diferentes modalidades de pensamiento en las que se puede gobernar las conductas de los otros y de nosotros mismos.

En la década de los ochenta, en consonancia con el surgimiento del neoliberalismo, emergió un nuevo paradigma en torno a las políticas de seguridad basado en la prevención del delito más allá de la pena tanto en el mundo anglosajón como en Europa. El demostrado fracaso de la política penal junto con la emergencia de la racionalidad política neoliberal y el incremento de la “inseguridad” objetiva y subjetiva llevaron a que este nuevo paradigma se “globalizará” e irrumpiera en la Argentina durante la década del noventa.

En Neuquén, aparecen los primeros rasgos de estas ideas hacia el año 2000 y se materializan en distintas políticas y planes de seguridad: plan de reforma de la policía y creación de una Policía Comunitaria, Plan Integral de Seguridad 2004-2007, Plan de Gobierno de Seguridad Ciudadana 2008-2011 y, a partir de 2012, el Plan Provincial de Seguridad.

En este sentido, nuestro interés se centra en el modo en que la racionalidad políticas neoliberal ha influido en la prevención del delito en la Provincia del Neuquén entre 2012 y 2015 atendiendo al caso concreto de la instalación de videocámaras de seguridad. Dado que estas racionalidades aparecen en la superficie del discurso político y en las diversas técnicas utilizadas para producir los efectos esperados, nos centraremos en el análisis de los discursos del gobernador de la provincia impartidos en la apertura de sesiones legislativas durante aquellos años, de documentos y proyectos de gobierno y en artículos periodísticos de diarios de difusión masiva (Diario Rio Negro y Diario La mañana de Neuquén).

Cabe destacar que este trabajo se inserta dentro de una investigación más amplia acerca de las políticas de seguridad implementadas por el poder ejecutivo provincial desde 1999, año de la creación de la Subsecretaría de Seguridad. En este sentido, a través de este trabajo, no pretendemos analizar pormenorizadamente cada una de las políticas de seguridad implementadas en el período de estudio. Asimismo, no buscamos evaluar los resultados de dichas políticas sino sólo dar cuenta de las racionalidades que están por detrás de las mismas.

Algunas consideraciones en torno a la “inseguridad” y el “neoliberalismo”

En los últimos años, el problema de la (in)seguridad (Ranguigni, 2010a) se ha convertido en un tema recurrente en las ciencias sociales así como en el ámbito político y mediático. Hasta el momento, la mayoría de los estudios realizados en dichas ciencias parten del presupuesto de que la "inseguridad" existe como una realidad incuestionable que requiere de soluciones que garanticen la "seguridad" (Ranguigni, 2010^a). En menor medida, se encuentran trabajos que

adoptan una perspectiva distinta que podría denominarse crítica no propositiva (Pegoraro, 2000; Rangugni, 2004; Sozzo, 2000; Daroqui, 2003). Desde la misma, se parte de considerar a la (in)seguridad como una construcción social, específicamente, una particular experiencia histórica relacionada a una reproblematicación del problema del delito (Rangugni, 2010b). En este marco, las políticas de seguridad no aparecen como algo que debe diseñarse atendiendo a los derechos humanos sino como estrategias que contribuyen a construir el problema de la (in)seguridad con miras a normalizar a los individuos y a la población para reproducir determinado orden social (Pegoraro, 2008).

En este sentido, advertimos que este trabajo parte de una perspectiva crítica-analítica que no pretende plantear "soluciones" al problema de la (in)seguridad sino indagar en las distintas técnicas desplegadas desde el ejecutivo provincial entre 2007 y 2014 para su "gobierno" entendido como la conducción de los hombres y de las cosas, de las conductas (Foucault, 2006), atendiendo, principalmente, a las políticas de seguridad. Así, se entenderán las políticas de seguridad como formas de control social cuyo fin es el encauzamiento de conductas para el mantenimiento del orden social.

A este respecto, retomamos el planteo de Pat O'Malley sobre la gubernamentalidad entendida como una perspectiva caracterizada por el interés en el análisis "genealógico" y por el énfasis sobre los modos en que los diversos procesos sociales reflejan el desarrollo de "racionalidades políticas" (concepciones, planes y programas de aquellos que pretenden gobernar) (O'Malley, 2006). En otras palabras, el enfoque de la gubernamentalidad intenta dar cuenta de en las distintas modalidades en las que podemos gobernar la conducta de los otros y nosotros mismos a partir del análisis de las "superficies" (discursos, palabras, categorías).

Como afirmamos anteriormente, a partir de los noventa se produce una reproblematicación del problema del delito que reduce la seguridad a la protección de personas y bienes, en espacios públicos y de visibilidad pública, contra aquellos actos que afectan la integridad física y la propiedad privada de los "ciudadanos" (Baratta, 1997; Ortiz Maldonado y Recepter, 2010; Pegoraro, 2003; Rangugni, 2010a). En tanto se presenta el problema de la seguridad como el problema del delito, se asimila la política de seguridad con la política criminal (Rangugni, 2009). En este sentido, siguiendo a Victoria Rangugni, la política criminal será entendida como aquella que tiene como objetivo reducir el número de infracciones delictivas, generalmente asociadas a

los “delitos callejeros” o “comunes”, y que, también, puede comprender el control de las consecuencias del delito (Baratta, 1998) a través de herramientas penales y extrapenales.

Cabe señalar que este proceso se produce en un contexto de grandes transformaciones económicas, sociales y culturales. Estas transformaciones, iniciadas en la década del setenta, son el resultado de la implementación de políticas económicas neoliberales. En este sentido, el “neoliberalismo” debe ser considerado como una reacción frente al “welfarismo” que caracterizó la “edad de oro” del Estado de Bienestar o Social. Se trata de un arte de gobierno, un tipo de racionalidad política y gestión de la vida y las relaciones sociales (Foucault, 2012; O’Malley, 2006) que, frente a los “individuos dependientes” del welfarismo, afirmó la necesidad de construir “individuos activos e independientes”. Para tal fin, relegitimó el libre mercado como el escenario indispensable para la creación de ese tipo de individuos, impulsando la transformación de las instituciones estatales en “empresas”. En este sentido, una de las transformaciones llevadas a cabo por el neoliberalismo fueron las privatizaciones de áreas y servicios antes provistos por el Estado.

De este modo, también la seguridad fue corrida de la esfera social/estatal hacia la esfera individual/privada. En este sentido, se produjo un proceso de “responsabilización” (O’ Malley, 2006) en tanto los individuos racionales, independientes, responsables y emprendedores deben “elegir” el modo más adecuado de protegerse de los riesgos de la vida moderna. Esta imagen del individuo como un ser racional que puede elegir libremente no sólo refiere a la víctima de un delito sino también al ofensor. En esta racionalidad, éste es alguien igual a “nosotros” que elige racionalmente cometer un delito.

El ¿surgimiento? de la prevención más allá de la pena

De acuerdo con David Garland, el Estado de fines del siglo XX se encuentra frente a un nuevo dilema originado en la normalización de elevadas tasas de delito y las limitaciones reconocidas de la justicia penal estatal (Garland, 2005) que ha llevado a que actúe de manera esquizofrénica oscilando entre dos posturas. Por un lado, reconoce sus límites para el control del delito y asume que la criminalidad no es algo que pueda controlar por sí mismo, abriendo entonces el juego a estrategias adaptacionistas de carácter heterogéneo y convocando a nuevos actores e instituciones a participar y responsabilizarse. Aquí se vislumbra la penetración de la racionalidad política neoliberal en una manifestación de la criminología del sí mismo (Garland, 2005). Así, se produce

una reubicación y redefinición de las responsabilidades desde los actores estatales tradicionalmente encargados del control del delito hacia otros actores en un proceso de responsabilización (O'Malley, 2006) e individualización (Pitch, 2009). Por otro lado, como asumir esta limitación pone en jaque el mito del Estado soberano -mito fundacional del Estado moderno- surgen estrategias de negación con el objetivo de reafirmar dicho mito que derivan en el surgimiento de una especie de "populismo punitivo" basado en la consideración del delincuente como un "otro" inasimilable al "nosotros", es decir en una criminología del otro donde se visualiza la penetración de la racionalidad política "neoconservadora" (Garland, 2005) y que deriva, en algunos casos, en la constitución de un "Estado Penal" (Wacquant, 2007).

En relación con esto, Victoria Rangugni habla de una bifurcación de la política criminal (Rangugni, 2004, 2009) donde se manifiesta la preminencia de la racionalidad neoliberal y conservadora (Ayo y Pla, 2007; Hener y Niszt Acosta, 2004; Galvani et. al. 2010; Pegoraro, 2002; Garland, 2005; O'Malley, 2006). Por un lado, una creciente confianza en las medidas reactivas o punitivas (O'Malley, 2006, Wacquant, 2000; Garland, 2005; Tiscornia, 1999; Daroqui, 2002; Galvani et. al., 2010), dentro de las cuáles se encuentra la "Nueva Penología" (Feeley y Simon, 1995). Por otro lado, el surgimiento de medidas alternativas de control del delito de carácter heterogéneo entre las que se encuentra el resurgimiento de la prevención del delito más allá de la pena, lo que en algunos contextos, como en Francia e Italia, fue denominado "Nueva Prevención" con el fin de diferenciarla de la pretendida prevención del delito a través de la pena (Crawford, 1998; Baratta, 1997, 1998; Sozzo, 2000; Pegoraro, 2002; Daroqui, 2003) y, en otros, como "seguridad comunitaria" para hacer hincapié en la apelación a la "comunidad" como uno de los actores involucrados en el control del delito junto con las agencias estatales y en la importancia de la localidad.

De este modo, a partir de la década del setenta, en consonancia con el surgimiento del neoliberalismo y del "neoconservadurismo" (O'Malley, 2006; Garland, 2005) y como resultado de la crisis del sistema de justicia penal (Crawford, 1998; Garland, 2005; Selmini, 2008) emergió un "nuevo paradigma" en torno a las políticas criminales basado en la prevención del delito sin apelar a la pena tanto en el mundo anglosajón como en Europa. Este campo se ha ido construyendo "internacionalmente", alimentado por un flujo creciente de "viajes culturales" (Sozzo, 2008) entre diversos contextos e impulsado por actores nacionales gubernamentales, no gubernamentales, "híbridos" y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de carácter

internacional dedicadas a promover la importación cultural de estas nuevas iniciativas y acciones. Por este motivo, estas ideas “ingresaron” a América Latina y Argentina en la década de los noventa y se “radicalizaron” (Melossi, 1997) asumiendo formas diferentes a las originales. En la Provincia del Neuquén, estas ideas comenzaron a mostrarse de forma incipiente y con diferentes vaivenes alrededor del año 1999.

En términos estrictos, el surgimiento del campo de la “prevención más allá de la pena” no tiene nada de “novedoso” ya que es posible encontrar distintos antecedentes a lo largo de la modernidad. En este sentido, desde la segunda mitad del siglo XVIII, en el marco del pensamiento ilustrado, emergieron ciertas referencias discursivas a dicho tipo de prevención, aunque de forma marginal. En esta línea encontramos aportes de ciertos autores “ilustrados” como Cesar Beccaria (2004), “utilitaristas” como Jeremy Bentham (1822), “positivistas” como Enrico Ferri (1907), entre otros. De este modo, no se trata tanto de un “nuevo paradigma” sino más bien de un resurgimiento de la “prevención del delito más allá de la pena” que refuerza en el plano discursivo y práctico las ideas desarrolladas de forma marginal con anterioridad (Sozzo, 2000; Crawford, 1998).

Definiendo la “prevención del delito más allá de la pena”...

A este respecto, es interesante la definición de prevención del delito que da Van Dijk ya que la define como “todas las políticas, medidas y técnicas, fuera de los límites del sistema de justicia penal, dirigidas a la reducción de las diversas clases de daños producidos por actos definidos como delitos por el Estado” (Van Dijk; 1990:205). Sin embargo, esta definición puede ser ampliada por aquella que brinda Rossella Selmini (2008) y que define a la “nueva” prevención como “el conjunto de las estrategias dirigidas a disminuir la frecuencia de ciertos comportamientos, sean estos considerados o no punibles por la ley penal, a través del uso de instrumentos diversos de aquellos penales” (Selmini, 2008: 45) de forma directa y pro-activa a través del involucramiento de nuevos actores y teniendo a los autores, víctimas y comunidad como destinataria.

El campo de la “prevención más allá de la pena” no es homogéneo ni uniforme en tanto conviven diversas “estrategias” con fundamentos, racionalidades, tácticas diferentes y contradictorias que se proponen no sólo reducir la inseguridad objetiva –o sea la probabilidad de ser víctima de un delito- sino también la inseguridad subjetiva –o “sensación de inseguridad”-. En este sentido,

existen diversas clasificaciones de las intervenciones que buscan prevenir el delito mediante recursos extrapenales (Crawford, 1998). Una de ellas consiste en la diferenciación entre estrategias situacionales y ambientales y estrategias sociales y comunitarias (Crawford, 1998). Sin embargo, a fines conceptuales, retomaremos la clasificación realizada por Máximo Sozzo que distingue la estrategia social de la comunitaria en tanto considera que privilegian formas de intervención diferentes, aunque reconoce las relaciones que se establecen entre sí (Sozzo, 1999). En términos generales, estas estrategias presentan ciertas características comunes: la atribución de gran importancia a los actores estatales y no estatales que tradicionalmente ocupan un lugar marginal o nulo en el control del delito; la relevancia que se le otorga a la coordinación y articulación de los esfuerzos públicos entre sí y junto con los esfuerzos privados en el marco del “partnership”; la importancia atribuida a la localidad como fuente de soluciones al problema del delito atendiendo a las especificidades de cada caso particular; la preeminencia que se le otorga a la producción de conocimientos científicos sobre el delito y el miedo al delito para realizar diagnósticos y evaluaciones de las diversas intervenciones (Sozzo, 2000).

Al hablar de “estrategias”, retomando el concepto de Sozzo, hacemos referencia a formas de pensar y poner en práctica la prevención del delito más allá de la pena que poseen efectos sociales y culturales característicos. Estas estrategias, en tanto formas de pensar, involucran diversos presupuestos teóricos y políticos que no sólo refieren a los modos de prevenir el delito sino también a la definición de delito, la explicación del delito, la definición del rol de los agentes estatales y de los no estatales. Asimismo, estas estrategias, en tanto formas de actuar, involucran diversas “técnicas de intervención” (Castel, 2009) es decir maneras de actuar dirigidas a la manipulación del mundo físico o social de acuerdo a determinadas rutinas (O’Malley, 2006). Por último, las estrategias poseen efectos deseados y no deseados en la manera en que los individuos actúan, piensan y hablan.

Dentro de las estrategias antes mencionadas, encontramos, en primer lugar, la estrategia situacional y ambiental. Esta consiste en la intervención directa sobre la situación y el medio ambiente inmediato en el que ocurren los delitos (a través de la instalación de cámaras de seguridad, iluminación, mayor presencia policial, etc.) con el fin de reducir las oportunidades para la realización de los mismos incrementando los costos y disminuyendo los beneficios de cometer un delito (Crawford, 1998; Sozzo, 1999, 2008; Selmini, 2009). En este sentido, esta

estrategia se orienta tanto hacia los victimarios como las posibles víctimas en tanto no sólo pretende disminuir la inseguridad objetiva sino también la inseguridad subjetiva.

Por otro lado, se encuentra la estrategia social que pretende prevenir el delito interviniendo sobre los factores causales de la delincuencia, es decir aquellos que llevan a los individuos a delinquir y que pueden hacer desistir a esos mismos individuos de cometer algún delito, como la pobreza, la exclusión social, la desocupación, el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, etc., organizando grupos de reflexión y capacitación, otorgando ayudas económicas, instalando clínicas de rehabilitación, etc. De este modo, esta estrategia se orienta directamente hacia los victimarios o posibles infractores definidos como “grupos de riesgo o vulnerables” –en general, personas que reúnen características comunes como ser jóvenes de familias de bajos ingresos, con escasa educación formal y con dificultades para el ingreso al mercado laboral (Crawford, 1998; Sozzo, 1999,2008; Selmini, 2008).

Por último, la táctica comunitaria consiste en una “forma de pensar la prevención del delito – que se imbrica con formas de actuar - que se encuentra entre la táctica situacional-ambiental y la táctica social” (Sozzo, 1999) que, a diferencia de las demás estrategias, está orientada principalmente a la comunidad como objeto y sujeto de intervenciones en lugar de estar orientadas a las víctimas o a los ofensores. En este sentido, la intervención básicamente se da por la participación de aquellos que comparten un espacio o valores y tiene como meta reconstruir y reforzar el control social informal del territorio por parte de sus habitantes (Sozzo, 1999) en complementariedad con las instancias de control social formal, como la policía. En este marco, se considera que dicho control debe centrarse no sólo en los delitos punibles sino también en las incivildades en tanto al no “castigarse” traen aparejadas delitos cada vez más graves y el incremento de la sensación de inseguridad.

La prevención del delito desde 2012

En el año 2011, con el cambio de gestión de gobierno , se deja a un lado el Plan de Gobierno de Seguridad Ciudadana¹ y comienza a implementarse el denominado Plan Provincial de Seguridad

¹ Este plan se plantea como objetivo general la prevención de la violencia, los delitos y la sensación de inseguridad teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales. A este respecto, sostiene que es necesario “establecer mecanismos que eviten la aparición y desarrollo de actos delictivos, promoviendo y fortaleciendo la seguridad no sólo a través del sistema formal de justicia criminal sino también a través de la implementación de estrategias que involucran a los diferentes sistemas informales de prevención, como los colegios, instituciones religiosas, y la ciudadanía en general” (Decreto 1714/08).

(en relación con el mismo no hay ningún documento público). En términos discursivos, uno de los ejes centrales de este plan también es la participación ciudadana junto con la prevención situacional del delito. En este sentido, en el informe de gestión del gobierno del año 2012 se sostiene que en las últimas dos décadas, el tratamiento de la seguridad pública “dejó de estar centrado exclusivamente en el monopolio de la fuerza y el poder del Estado para comenzar a completarse con la definición de las políticas públicas con participación ciudadana”. Sin embargo, a diferencia del plan anterior, la prevención situacional adquiere un lugar de gran relevancia, a punto tal que aparece en los medios de comunicación locales y en los discursos de los funcionarios políticos como si fuera la “única” acción llevada a cabo por el ejecutivo provincial para prevenir el delito.

En este sentido, sostuvo el gobernador Jorge Sapag, que “necesitamos activar un sistema de seguridad donde la Policía, las distintas instituciones del Estado, del municipio, todo lo que tiene que ver con los poderes del Estado más el ciudadano se integren todos en un sistema de seguridad. Entonces la video cámara, la política de proximidad de la Policía con el ciudadano, la participación del ciudadano, que el ciudadano tenga confianza en la institución policial y se acerque y que tenga el teléfono celular del patrullero que ya lo conoce, van a ser los efectivos, siempre van a ser los mismos efectivos en el mismo sector de manzanas al cual está asignado esta unidad móvil, esta comisaría móvil” (Portal del Gobierno de la Provincia del Neuquén, 27/07/2012).

En este marco, se ha implementado un Plan Policial denominado “Sistema por cuadrícula”², así como también la instalación de cámaras de seguridad y el incremento de móviles policiales y policías. A esto se suma la disposición de botones antipánico que hasta la fecha no han sido instalados. De este modo, el modo predominante a través del cual el ejecutivo provincial está gobernando el delito es la prevención situacional en estrecha relación con la prevención comunitaria. En este sentido, afirma Sozzo que este tipo de estrategia situacional se presenta, principalmente, como respuesta pragmática a determinadas “crisis de seguridad”, como el aumento de los delitos, el incremento de la sensación de seguridad, etc., en determinados

² Se trata de una estrategia policial de saturación territorial. La idea central de este sistema consiste en trazar cuadrículas en cada barrio y en asignar a cada uno un patrullero y un medio de comunicación directa con los vecinos de esa cuadrícula (un número de celular al que pueden llamar los vecinos si lo necesitan). Estos móviles, que no pueden salir de su jurisdicción, han sido distribuidos en todos los barrios de la ciudad de Neuquén según la complejidad que se estableció a partir del mapa de delito: los barrios más chicos tienen un solo móvil y los barrios más grandes tienen hasta tres móviles.

contextos culturales, políticos y económicos “que se traduce en expectativas moderadas con respecto al control del crimen (...) todo esto bañado con un tibio optimismo” (Sozzo, 2008). En el caso de la provincia del Neuquén, habría que indagar acerca de los motivos del énfasis en este tipo de estrategia pero podríamos hipotetizar que se debe, en cierta medida, a la aparición de casos de gran resonancia pública (asesinato de un taxista en julio de 2011) y, principalmente, a la puesta en escena del tema de la “inseguridad” en la campaña política del ahora intendente de la ciudad capitalina, Horacio Quiroga, quien tiene aspiraciones a la gobernación provincial y no pertenece al MPN (Movimiento Popular Neuquino). En este sentido, cabe destacar que la mayoría de las disputas entre municipio y gobernación han girado en torno al tema de la seguridad.

De acuerdo con declaraciones del ejecutivo provincial, la puesta en marcha del sistema de videocámaras tiene como objetivo ofrecer una pronta respuesta ante accidentes y emergencias; mejorar la prevención del delito para asegurar una mayor seguridad; dar alertas tempranas para la intervención policial; contar con pruebas en causas judiciales; realizar la lectura de patentes para detectar vehículos con pedido de secuestro; visualizar el estado del tránsito; y preservar el patrimonio público, entre otros. Hasta el momento se han instalado un total de 280 cámaras en distintos sitios de la capital neuquina que han sido marcados por la policía y el gobierno como los indicados para prevenir delitos seguidos y que son controladas desde un centro de monitoreo que está ubicado en la sede central de la Policía. Cabe resaltar que también se han implementado este tipo de dispositivos en otras localidades de la provincia como Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Cutral Co.

El objetivo de la estrategia de prevención situacional se encuentra en la prevención del delito a través de la disuasión. En este sentido, según el propio gobernador “se van a multiplicar los ojos de la institución policial y de la sociedad en su conjunto, con fuerte presencia en la ciudad para la prevención, la disuasión y también para tener herramientas claras para la actuación judicial” (Rio Negro, 26/07/2012). En este sentido, uno de los presupuestos teóricos que encuentran detrás es que la producción de un delito es el resultado de un proceso de pensamiento racional y voluntario llevado adelante por el individuo. De este modo, el individuo elige libremente, a partir de un cálculo racional de las ventajas y desventajas, entre una serie de alternativas posibles buscando optimizar los beneficios y reducir los perjuicios. Así, la mayor presencia policial, las videocámaras y los botones antipánico buscan influir en este proceso de pensamiento

incrementando los riesgos y esfuerzos involucrados en la realización de un delito al aumentar las posibilidades de detección y aprehensión.

Se trata de un “modelo económico del crimen” que presupone que todos los tipos de delitos son racionales, cuando no lo son (Crawford, 1998) y que existe un individuo “abstracto universal y biográfico” (O’ Malley, 2006) capaz de hacer elecciones voluntarias y libres de actuar en forma racional totalmente separado del contexto social o estructural. En este sentido, se visualiza elementos propios de la racionalidad política neoliberal. Asimismo, se olvida de las causas del delito, hecho que es reconocido por los funcionarios entrevistados. De acuerdo a las entrevistas realizadas “la prevención situacional no ataca las causas de la delincuencia”, hay que “trabajar con la prevención social” y para ello está el PreViDA³.

La Teoría de la Acción Racional se une con la Teoría de las Actividades Rutinarias en este tipo de estrategia. De acuerdo con esta teoría, existen tres elementos que explican la producción de un delito: un potencial ofensor, un potencial blanco y la ausencia de un guardián capaz (no sólo refiere a agentes policiales sino también vecinos, amigos, familiares, etc.) que tienen diferentes niveles de responsabilidad en la prevención de un delito. Estos tres elementos conviven temporal y espacialmente en las ciudades debido a las actividades rutinarias que allí se realizan. Por este motivo, hay que aumentar la responsabilidad de desalentar los incidentes criminales. Así el delito es un aspecto normal de la vida moderna que no requiere una motivación o disposición especial sino que es un riesgo que debe ser calculado (Garland, 2005).

Palabras finales

A modo de palabras finales, podemos afirmar que la racionalidad política neoliberal ha impregnado las políticas de seguridad implementadas en los últimos años al pensar al ofensor como un “homo economicus” que realiza un cálculo de costo-beneficio a la hora de infringir la ley; al recurrir al mercado para prevenir el delito mediante la compra de cámaras de seguridad,

³ Programa Provincial de Prevención de Violencia, Delito y Adicciones (PreViDA). Como el nombre lo indica, el objetivo de este programa es la prevención de la violencia, el delito y las adicciones a través de la capacitación de la ciudadanía. A este respecto, es importante destacar que una vez que se realiza el diagnóstico de la situación en cada barrio o localidad, se planifica una capacitación específica en cada problemática (violencia, delito, adicciones) que puede adoptar la forma de cursos, talleres, jornadas, actividades comunitarias, etc. En tanto sólo nos interesan la políticas de seguridad en tanto son consideradas como políticas criminales, nos centraremos en lo que especifica el programa para la prevención. A este respecto, el programa se desarrolla por medio del sub- programa Prevención Situacional del Delito, sub-programa Clínica de Barrios y sub-programa Prevención en Trata de Personas .

móviles y botones antipánico; al pensar en términos de “eficiencia” y “eficacia” la prevención del delito.

Bibliografía

Ayos, E. y Pla, J. (2007). "Políticas de prevención del delito: nuevo escenario social, teoría social y condiciones de posibilidad". Ponencia presentada en las Jornadas Pre-ALAS: "Sociología y Ciencias Sociales: conflictos y desafíos transdisciplinarios en América Latina y el Caribe". Buenos Aires.

Baratta, A. (1997). "Política criminal: entre la política de seguridad y la política social" en Carranza, E. (coord.) Delito y seguridad de los habitantes. México: Ed. Siglo XXI.

----- (1998). "Entre la Política Social y la Política de Seguridad". En El Cotidiano, pp. 2-24. Mexico.

----- (2004). Criminología crítica y crítica del derecho penal. Introducción a la sociología jurídico penal. Buenos Aires. Siglo XXI.

Beccaria, C. (2004). De los delitos y de las penas. (1764). Buenos Aires. Losada.

Bentham, J. (1822). Tratados de legislación civil y penal. Madrid. Imprenta de Villapando.

Castel, R. (2009), El orden psiquiátrico. La edad de oro del alienismo. Buenos Aires. Nueva Visión.

Crawford, A. (1998). Crime Prevention and community Safety. London & New York: Ed. Longman.

Daroqui, A. (2002). “La cárcel del presente, su ‘sentido’ como práctica de secuestro institucional”. En Gayol, S. y Kessler, G. (comp.). Violencias, delitos y justicias en la Argentina. Buenos Aires: Manantial, Universidad Nacional de General Sarmiento.

----- (2003). "Las seguridades perdidas". En Revista Argumentos, nro. 2., Buenos Aires.

Feeley, M. y Simon, J. (1995). “La nueva penalología: notas acerca de las estrategias emergentes en el sistema penal y sus implicaciones”. ". En Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, nro 6/7, año 4. Buenos Aires-Santa Fe: Universidad de Buenos Aires y Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral.

Ferri, E. (1907). Sociología criminal. Madrid Gongora.

Foucault, M. (1992). Microfísica del poder. Madrid. Ediciones de La Piqueta.

----- (2005). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.

----- (2006). Seguridad, territorio y población: Curso en el College de France: 1977-1978. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

----- (2008). Historia de la sexualidad. La voluntad del saber. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.

Gaitan, M. (2010), "De "un experto en seguridad" a jefe de la Policía Metropolitana. Una revisión crítica de los antecedentes de Eugenio Burzaco" en Anitua, G. La Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires: Ed. Ah-Hoc.

Galvani, M., Mouzo, K. y Rios, A. (2010) "¿Qué estudiamos cuando estudiamos las fuerzas de seguridad? Una revisión crítica sobre la construcción del objeto". En Galvani, M. et. al. A la inseguridad la hacemos entre todos: prácticas policiales, mediáticas y académicas. Buenos Aires: Hekht Libros.

Galvani, M. et. al. (2010). A la inseguridad la hacemos entre todos: prácticas policiales, mediáticas y académicas. Buenos Aires: Hekht Libros.

Garland, D. (2005). La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa Editorial.

Hener, A. (2005). "Políticas de seguridad en clave comparativa: la emergencia del paradigma preventivo del delito en Argentina y Brasil". Ponencia presentada al XXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), Porto Alegre, Brasil.

Hener, A. y Niszt Acosta, F. (2004) "El control del delito en la Ciudad de Buenos Aires. Nuevas racionalidades y tecnologías de gobierno". Ponencia presentada a las VI Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Buenos Aires.

Janowitz, M. (1995). "Teoría social y control social". En Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, nº6/7, año 4. Buenos Aires-Santa Fe: Universidad de Buenos Aires y Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral.

Keeling, G. y Wilson, J. (2001). "Ventanas rotas. La policía y la seguridad en los barrios". En Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, nº 15/16. Buenos Aires-Santa Fe: Universidad de Buenos Aires y Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral.

Melossi, D. (1992). El Estado del control social. México: Siglo XXI.

----- (1997). "La radicación ("Radicalismo"- "Embedness") cultural del control social (o la imposibilidad de la traducción): reflexiones a partir de la comparación de las culturas italiana y norteamericana con respecto al control social". En Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, nº 9/10. Buenos Aires-Santa Fe: Universidad de Buenos Aires y Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral.

O'Malley, P. (2006). Riesgo, neoliberalismo y justicia penal. Buenos Aires. Ad Hoc.

Ortiz Maldonado, N. y Recepter C. (2010). "El poder de no saber. Estrategias de neoliberalismo aplicado". En Galvani, M. et. al. A la inseguridad la hacemos entre todos: prácticas policiales, mediáticas y académicas. Buenos Aires: Hekht Libros.

Park, R. (1997). "La sociología y las ciencias sociales". En Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, n°9/10, año 6 .Buenos Aires-Santa Fe: Universidad de Buenos Aires y Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral.

Pavarini, M. (2006). Un arte adyecto. Ensayo sobre el gobierno de la penalidad. Buenos Aires. Ah Hoc.

Pegoraro, J. (1995). "Teoría social, control social y seguridad. El nuevo escenario de los años 90" en Pavarini, M. y Pegoraro J. El control social en el fin de siglo. Cuadernos de posgrado. Universidad de Buenos Aires.

----- (2000). "Violencia delictiva, inseguridad urbana. La construcción social de la inseguridad ciudadana". En Revista Nueva Sociedad, nro 167, pp. 114-131. Caracas, Venezuela.

----- (2002). "Las políticas de seguridad y la participación comunitaria en el macro de la violencia social" en Briceño-León, R. (comp.), Violencia, sociedad y justicia en América Latina, Buenos Aires: Clacso.

----- (2003). "Una reflexión sobre la inseguridad". En Revista Argumentos, nro 4, Buenos Aires.

----- (2008). "Las paradojas del control social punitivo". En Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, nro 25, año 17, pp. 7-33. Buenos Aires-Santa Fe: Universidad de Buenos Aires y Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral.

Pitch, T. (1996). "¿Qué es el Control Social?". En Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, nro 8, año 5, pp. 51-72. Buenos Aires-Santa Fe: Universidad de Buenos Aires y Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral.

----- (2009). La sociedad de la prevención. Buenos Aires. Ad hoc.

Rangugni, V. (2004). "Reforma del Estado y políticas de "control del delito" en la Argentina de los años 1990". En Muñagorri, I. y Pegoraro, J., La relación seguridad-inseguridad en centros urbanos de Europa y América Latina. Estrategias, políticas, actores, perspectivas y resultados. Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate-España: Dykinson.

----- (2009). "Emergencia, modos de problematización y gobierno de la in/seguridad en la argentina neoliberal". En Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, n° 27, año 18, pp. 23-43, Buenos Aires-Sante Fe: Universidad de Buenos Aires y Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral.

----- (2010a). "Prefacio". En Galvani, M. et. al. A la inseguridad la hacemos entre todos: prácticas policiales, mediáticas y académicas. Buenos Aires: Hekht Libros.

----- (2010b). "Prácticas policiales y gobierno de la (in) seguridad en Argentina. Apuntes para pensar el uso de la fuerza letal como técnica de regulación biopolítica". En Galvani, M. et. al. A la inseguridad la hacemos entre todos: prácticas policiales, mediáticas y académicas. Buenos Aires: Hekht Libros.

- Reiner, Robert (1992). *The Politics of Police*, Second Edition, University of Toronto Press, Toronto.
- Selmini, R. (2009). "La prevención: estrategias, modelos y definiciones en el contexto europeo", en URVIO. *Revista latinoamericana de Seguridad Ciudadana*, 6, 41-57.
- Sozzo, M. (2000). "Seguridad Urbana y tácticas de prevención del delito". En Cuadernos de Jurisprudencia y Doctrina Penal. nro 10. Buenos Aires: Ad-Hoc.
- (2005). "Metamorfosis de los discursos y las prácticas sobre la seguridad urbana en la Argentina" en Lucía Dammert y John Bailey (Comps). *Seguridad y reforma policial en las américas*, Siglo XXI, México.
- (2008). *Inseguridad, prevención y policía*. FLACSO Ecuador. Quito.
- Summer, C. (2003). "Control social: historia y política de un concepto central en la sociología angloamericana". En *Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales*, n°18-19, año 12. Buenos Aires-Sante Fe: Universidad de Buenos Aires y Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral.
- Svampa, M. (2005), *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires. Editorial Taurus.
- Tiscornia, S. (1999). "Violencia policial en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Cuestiones metodológicas y análisis de datos". En Sozzo, M. *Seguridad urbana: nuevos problemas, nuevas perspectivas*. Santa Fe: Centro de Publicaciones UNL.
- Van Dijk, J. (1990). "Crime Prevention Policy: Current State and Prospects", en Kaiser, G. y Albrecht, HJ: *Crime and criminal policy in Europe, Criminological research report*, Vol. 43, Max Planck Institute, Freiburg, 1990, pp. 205-220.
- Wacquant, L. (2000). *Las cárceles de la miseria*. Buenos Aires:Manantial.
- (2007). *Los condenados de la ciudad. Guetos, periferia y Estado*. Buenos Aires. Siglo XXI Editores.
- Young, J. (1993). "El fracaso de la criminología: la necesidad de un realismo radical" (1986), en AAVV: *Criminología crítica y control social*, Iuris, Rosario, pp. 5-39.